

Acumulación de fuerzas desde la memoria histórica

Marc Andreu

«En la próxima década, el escenario en el que se van a mover los movimientos sociales y, en especial, el vecinal, es el de la crisis económica». Ante este escenario, habrá que combinar viejas «estrategias de resistencia» para defender derechos sociales y lo público y nuevas estrategias de «politización de la sociedad» para recuperar capacidad de movilización con vistas a exigir «un cambio del modelo económico» que, a su vez, lleve aparejado una transformación social y política de calado.» Así de claro fue el sociólogo y miembro de la junta de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) Vicente Pérez Quintana en su intervención, el 10 de diciembre del 2009 en Barcelona, en una mesa redonda organizada con motivo de la exposición *Barcelona-Madrid. 40 años de acción vecinal*.

En el mismo acto, auspiciado por la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), el sociólogo y urbanista Jordi Borja afirmó también de forma rotunda: «El movimiento ciudadano tiene un futuro fantástico si toma conciencia de que estamos ante una época nueva y de que debe mirar al pasado para acumular fuerzas, pero no para reproducir debates estériles». Jordi Borja, que proclama el *derecho a la ciudad* teorizado por el filósofo marxista Henri Lefebvre y actualizado por el geógrafo también marxista David Harvey como «nuevo concepto unificante» e imprescindible catalizador de los viejos y nuevos movimientos sociales urbanos, defendió que estos, ante la evidencia de que el modelo de urbanización especulativa de las últimas décadas ha sido una de las causas de la crisis económica, «están legitimados para cuestionar el carácter democrático de los gobiernos». Por no haber hecho estos —sean gobiernos locales, autonómicos o estatales— políticas contra las desigualdades y por permitir, encubrir o incluso practicar la corrupción.

La crisis económica —con sus derivadas sociales (asociadas al paro, la vivienda y los servicios básicos), urbanísticas y de corrupción— y una acumulación de fuerzas desde el ejercicio de la memoria histórica vecinal acapararon, efectivamente, la mayoría de las energías de las asociaciones y federaciones vecinales del Estado español en un año, el 2009, en el que se conmemoraron los 30 años de ayuntamientos democráticos. Sin que, como era de prever, ni los discursos oficiales ni los relatos académicos reconocieran el papel del movimiento vecinal en la lucha por la democracia y la construcción de las ciudades. Por ello, entre otros motivos, se reveló como una acertada y nuclear iniciativa el proyecto (mucho más que una exposición) *Barcelona-Madrid. 40 años de acción vecinal*, que la FAVB y la FRAVM trabajaron conjuntamente desde el 2008 y que tendrá continuidad en el 2010 con su itinerancia por barrios y distritos.

Barcelona y Madrid, de la mano

El 27 de noviembre, en el Museu d'Història de Barcelona, y el 1 de diciembre, en el Museo de la Ciudad de Madrid, la FAVB y la FRAVM inauguraron su exposición ante varios centenares de activistas vecinales, de compañeros de viaje de todas las luchas urbanas de ayer y hoy, de los alcaldes de las respectivas capitales y de políticos de casi todo el arco parlamentario. Bajo distintos formatos (exposición, catálogo, DVD y la doble web www.memoriavecinal.org / www.memoriaveinal.org), *Barcelona-Madrid. 40 años de acción vecinal* es un trabajo de recuperación de la memoria histórica que

ofrece un recorrido por los ámbitos de reivindicación vecinal en Barcelona ciudad y en el Madrid metropolitano de las últimas cuatro décadas. Se centra especialmente en documentar y visualizar sobre los mapas de Barcelona y Madrid cerca de 200 luchas ciudadanas acabadas en victorias, no siempre rotundas pero sí tangibles: parques, plazas, equipamientos, servicios públicos, remodelaciones urbanas... Unas conquistas vecinales que permiten concluir que ni Barcelona ni Madrid serían hoy con las conocemos sin la huella de un movimiento social demasiadas veces ignorado pero capaz de construir ciudad, ciudadanía y democracia desde la práctica activa de la solidaridad.

Algunos de los visitantes *in situ* de la muestra se sorprendieron de que no fuera una exposición *clásica*, con profusión de plafones, fotografías y escenografía apropiada. Al margen de que se trata de un trabajo innovador pensado como muestra y archivo permanente accesible principalmente desde internet, está también lo que el periodista de *El País* Francesc Arroyo describió con «exposición austera» y muy imbuida por sus protagonistas del convencimiento de que «no son excombatientes porque la lucha continúa».^[1]

Como exposición, *40 años de acción vecinal* es, efectivamente, *austera*. Como trabajo de investigación, de recuperación de la memoria histórica y de reivindicación de un movimiento social es, efectivamente, una muestra *de combate*. Así lo marcó su concepción: un proyecto conjunto de la FAVB y la FRAVM nacido en previsión de que una celebración institucionalizada de los 30 años de ayuntamientos democráticos relegaría (como así fue) la memoria de los movimientos sociales; y un proyecto que se desarrolló pese a una dinámica política, mediática e incluso deportiva que muchas veces busca enfrentar a dos ciudadanías, las de Madrid y Barcelona, con un pasado y presente de luchas y retos compartidos.

La exposición es *austera* y la investigación *de combate* porque así lo marcaron también el talante del movimiento vecinal (trabajo colectivo y militante) y un presupuesto subvencionado que solo cubrió la parte técnica. La mayor parte del trabajo de comisariado, investigación y elaboración de contenidos hubiera sido imposible sin la desinteresada aportación colectiva de las asociaciones de vecinos y la personal de historiadores, geógrafos, periodistas, fotógrafos, ilustradores, arquitectos, sociólogos, antropólogos, diseñadores y activistas vecinales que, entre Barcelona i Madrid, suman un centenar de personas.

Dos combates de fondo

En la exposición se plasmaron dos ideas o combates de fondo.^[2] El primero es la reivindicación de que las ciudades las han construido las luchas sociales con mucha más incidencia o repercusión de la que explican la propaganda municipal y unos relatos históricos sobre la transición democrática que olvidan el papel clave que jugó el movimiento ciudadano. Es clarificador, por ejemplo, que de las 100 victorias vecinales destacadas para Barcelona, un 10% correspondan a los últimos tiempos del franquismo, un 30% al período de la transición (bajo la alcaldía designada de Josep Maria Socías Humbert) y un 60% a los 30 años de Ayuntamientos democráticos electos. De aquí extrae el periodista e historiador Jaume Fabre un dato revelador: durante la transición hubo una victoria vecinal cada mes; en democracia, el promedio es de dos cada año.^[3] En su colaboración para el catálogo barcelonés de la muestra que avanzó el número 115 de la revista *Carrer*, el arquitecto que fue delegado de Urbanismo de Socías durante la

transición, Joan Antoni Solans, corrobora esta capacidad de transformación de la ciudad por parte del movimiento vecinal: «El cambio que se desprende de la exposición debe adscribirse a los movimientos sociales».^[4]

El fondo de esta cuestión parecen no tenerlo claro las distintas administraciones públicas, pese a los discursos formales que los alcaldes Jordi Hereu y Alberto Ruiz Gallardón hicieron, respectivamente, en las inauguraciones de la muestra en Barcelona y Madrid. Se sabe, como recuerdan los arquitectos Josep Maria Montaner y Zaida Muxí, que «el poder tiende a lavar y blanquear la memoria, a minimizar a estos actores urbanos, construyendo una historia falsa».^[5] Lo cual nos lleva al segundo combate de fondo implícito en *40 años de acción vecinal*: el de la supervivencia de una memoria vecinal que es conserva frágil por falta de la atención institucional, mediática y académica y de la infraestructura histo-riográfica (archivos, monografías, seminarios...) de la que sí disponen partidos, sindicatos y otros movimientos sociales. Eso queda patente cuando deben de ser la FAVB y la FRAVM quienes viertan en una *austera* exposición gran cantidad de información, fotografías y carteles como inacabados cimientos de un trabajo de investigación histórica en el que está prácticamente todo por hacer.

En Barcelona, al margen de los trabajos impulsados por el desaparecido periodista Josep Maria Huertas, de la tarea de archivos históricos de barrio y del esfuerzo de muchas asociaciones y la propia FAVB, son responsables de la fragilidad de la memoria vecinal tanto las administraciones —por la inexistencia hasta tiempos muy recientes de políticas públicas de recuperación de la memoria democrática— como una historiografía que hasta hace muy poco no había entrado en este campo de estudio. Han tenido que pasar casi tres décadas desde la aparición de tesis doctorales aisladas sobre el movimiento vecinal como las de Anna Alabart y Josep Martí y de la pertinaz dedicación al tema de geógrafos como Mercè Tatjer y Jordi Borja hasta que, hace muy poco, historiadores, antropólogos, geógrafos, sociólogos, arquitectos y grupos de investigación de las universidades catalanas (UB, UAB, UPF y UPC) empezaran a trabajar este objeto de estudio a fondo y de forma más o menos sistemática.

Aun con matices, el panorama no es muy distinto en Madrid. El 2009 empezó con la presentación del imprescindible libro *Memoria ciudadana y movimiento vecinal* que, impulsado por la FRAVM y bajo la coordinación de Vicente Pérez Quintana y Pablo Sánchez, viene a llenar un vacío académico también clamoroso en la capital del Estado.^[6] De Manuel Castells a Paca Sauquillo, de Tomás R. Villasante a Jordi Borja, son una veintena larga de autores (conocidos o no) quienes dan cuerpo a esta recopilación de textos que cierra el presidente de la FRAVM, Nacho Murgui. Sin embargo, no deja de ser sintomático que, por ejemplo, el capítulo que analiza el papel de las mujeres en las asociaciones de vecinos lo firme una historiadora californiana, Pamela Radcliff, máxima especialista en la cuestión para Madrid. La prueba de que hasta hoy no ha habido especialistas autóctonos interesados en la materia es que, en este mismo campo que mezcla feminismo y movimiento vecinal, para Barcelona, fue la antropóloga y presidenta de la FAVB, Eva Fernández, quien presentó en el 2009 la primera tesina sobre las vocalías de mujeres en las asociaciones de vecinos de la capital catalana.

La exposición *Barcelona-Madrid. 40 años de acción vecinal* y todo lo que, de una forma amplia, llevó aparejado el proyecto —desde la fluida relación entre ambas

federaciones vecinales a la producción editorial asociada, desde la página web al libro *Memoria ciudadana y movimiento vecinal* y el monográfico de la revista *Carrer*— fue lo máximo que dio el año a la hora de acumular fuerzas desde la memoria histórica. Sin embargo, en muchos otros niveles del movimiento vecinal también se usaron aniversarios o hechos ligados a la memoria vecinal para reivindicarse, reflexionar mirando al pasado y tomar impulso para el futuro. Sirvan solo algunos ejemplos.

El primero es que, con motivo de los actos conmemorativos de su 50 aniversario, la Associació de Veïns de La Pau (de Badalona, tercera ciudad de Catalunya en número de habitantes) trajo a su barrio, para un acto, al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Otro ejemplo lo protagonizó la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), que empezó el 2009 con la resaca (y un monográfico de su revista *La Calle*) de haber celebrado a finales del 2008 su 30 aniversario y el proyecto de organizar, en noviembre del 2009, el II Encuentro Aragonés de Entidades Vecinales. Un encuentro del que, tres décadas después de fundarse la FABZ y a los 40 años de haber nacido el movimiento vecinal, surgió la nueva Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón.

Finalmente, y aunque parezca paradójico, también fueron ejercicios de capitalización del movimiento vecinal a cuenta de su memoria los homenajes o recuerdos a dos destacadas activistas fallecidas en diciembre de 2009 y a un dirigente vecinal muerto en diciembre del 2008. Fueron, en Barcelona, la líder vecinal de la Barceloneta Emilia Llorca y, en Palma de Mallorca, la activista vecinal y feminista Rosa Bueno. En Madrid, el homenaje fue tributado en junio del 2009 al sindicalista, militante comunista y dirigente vecinal Eusebio Calle: participaron cerca de un millar de personas y el acto se cerró con una dedicatoria enviada por el premio Nobel de Literatura José Saramago.

Que la apelación a la memoria histórica es un arma cargada de futuro se pudo entrever en la *Carta a los Reyes Magos* periodística con la que abrió el 2009 el presidente de Sogecable, exgobernador civil franquista de Barcelona y exministro de Gobernación de la transición Rodolfo Martín Villa. No deja de ser sintomático que la persona que hace más de tres décadas, entre otras actuaciones clave durante el proceso de democratización, puso trabas a la legalización de asociaciones de vecinos, en el 2009 pidiera recuperar «la Memoria Histórica que llenó la transición, una Memoria que ha demostrado ya con sobrada eficacia su capacidad para asegurar la concordia».^[7] Quizá es que le incomoda que haya quien recupere alguna otra memoria que no sea la suya.

Un difuso malestar social

Casi a la inversa que lo sucedido con el trabajo vecinal de recuperación de la memoria histórica, en el 2009 no tuvo casi repercusión social la preocupación de las asociaciones y federaciones vecinales por el encarecimiento y la precarización de los servicios públicos esenciales y de la vivienda en el contexto de la dura crisis económica. Es cierto que, retomando el hilo de lo que ya se había intentado en el 2008, las entidades vecinales trataron de aunar fuerzas con organizaciones de consumidores y sindicatos para galvanizar en la calle un difuso malestar social con la crisis y a cuenta de las subidas, muy por encima del IPC, de servicios básicos como la luz y el transporte público. «Basta de abusos en nuestros barrios» fue el lema con el que, de forma similar a otros lugares del Estado, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc) trató de sacar a la gente a la calle en marzo. Acabó en un gesto testimonial.

Pese al apoyo formal de varias asociaciones de consumidores y de los sindicatos CCOO y UGT a la campaña vecinal contra el encarecimiento de los servicios básicos, mucho tiene que ver la tibia respuesta sindical a la hora de hacer frente a la crisis con el hecho de que un malestar social que se presupone latente en muchos barrios no saliera a relucir tampoco en el 2009. Al menos en los términos que quisieran los movimientos sociales. «Una crisis sin apenas conflictividad social es un capital que el Gobierno tiene, aunque hasta el momento no le haya sacado rendimiento», reflexionaba a finales de año el filósofo y periodista Josep Ramoneda.^[8] Seguramente es así, pero una crisis sin apenas conflictividad social es también otras cosas: un serio aviso a los movimientos sociales como el vecinal, incapaces de encauzar en clave transformadora el malestar que en otras épocas sí habrían recogido, y un riesgo evidente de que al final se produzca un estallido social sin control y en clave reaccionaria o xenófoba. Eso es de lo que durante el 2009 siguieron alertando voces diversas que sintetizó bien el arquitecto madrileño José María Ezquiaga: «Una ciudad segregada en barrios rodeados de autopistas produce una ciudad insolidaria y peligrosa, con explosiones de violencia como vimos en las periferias de París».^[9]

Está por ver cómo sigue o acaba todo. Pero, en realidad, algo de este riesgo de estallido social reaccionario o xenófobo hubo ya en el debate sobre la negativa o las trabas para empadronar a inmigrantes abierto en enero del 2010 a cuenta de una petición pública del Ayuntamiento de Vic (gobernado por CiU, PSC y ERC y azuzado por la extrema derecha local, segunda fuerza política en la localidad). La primera réplica del *terremoto* de Vic fue la visualización de un *seísmo* parecido en Torrejón de Ardoz, al que siguieron en cascada noticias de fenómenos similares y ocultos hasta entonces en municipios de toda España. Como reacción hubo un tibio, confuso o tardío posicionamiento de la mayoría de fuerzas políticas. La excepción: las fuerzas a la izquierda de los socialistas y el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue claro al garantizar a todo el mundo, de palabra, los derechos básicos a los que da acceso el empadronamiento. De palabra y en un tono que incluso el conmitón de Zapatero y presidente catalán José Montilla criticó sin tapujos tildándolo de «buenista».

Lo cierto es que, en la práctica, y aun coincidiendo con un descenso del número de inmigrantes llegados a España, el Gobierno del PSOE se planteaba, a principios de 2010, introducir cambios normativos para permitir a los ayuntamientos denegar el padrón a inmigrantes en determinadas circunstancias. Para luchar contra los pisos patera, se justificaba el PSOE, aun sin entrar en el debate de fondo sobre la vulneración del derecho constitucional a la vivienda ni prever si alterar la más o menos neutra estadística del padrón pudiera ser contraproducente. Mientras tanto, en muchos barrios y ciudades seguía siendo el tejido asociativo y vecinal el que hacía el trabajo de base y solidario de ayuda e integración hacia los nuevos vecinos. A su vez, en otros barrios y localidades, la derecha más extrema avanzaba en su tarea de infiltración en algunas asociaciones de vecinos para mejor azuzar el miedo al inmigrante en tiempos de crisis y de competencias por los servicios públicos y sociales.

Ante este contexto, el dirigente de la FRAVM Vicente Pérez Quintana resumió en diciembre la doble estrategia combinada que el movimiento vecinal trató de hilvanar en el 2009: exigir un cambio del modelo económico y, al mismo tiempo, organizar la resistencia en defensa de lo público, tanto en el ámbito de la calle como en el legislativo. El objetivo es que, pese a la crisis, derechos sociales conquistados durante

años de lucha de todos los movimientos sociales no se recorten y también, en lo posible, tratar de asegurar que derechos proclamados hasta en la Constitución como los de la educación, la sanidad y la vivienda no queden en papel mojado.

Precisamente alrededor del derecho a la vivienda, como en otros tantos aspectos sociales ligados a la crisis, en el 2009 los movimientos sociales parecieron vivir aún en el impase reactivo que les pilló a contrapié en el 2008 al estallar la coyuntura económica. Si bien es cierto que a lo largo del año se ampliaron los contactos y trabajos para tratar de reorganizar en movimiento de hipotecados y desahuciados lo que en años anteriores fueron las exitosas pero efímeras manifestaciones por el derecho a la vivienda, la realidad es que en el 2009 aún no pudo concretarse nada de calibre. Y eso que fue el año en el que el Congreso discutió y aprobó (con la única oposición de IU, ICV y ERC) la denominada ley del *desahucio exprés*, que entró en vigor el 28 de diciembre y estigmatiza y reduce los derechos de los inquilinos en beneficio de los propietarios y los bancos.

La paradójica situación la resumió bien una de las portavoces del movimiento V de Vivienda, Ada Colau, que, a falta de reacción social en el 2009, profetizó un estallido social para el 2010: «El Gobierno, en plena crisis, lejos de dar respuesta a la inseguridad de las miles de familias que se verán en la calle por razones económicas ajenas a su voluntad, aprueba una medida que favorece a la minoría más rica, la rentista, la que ni siquiera necesita trabajar para vivir holgadamente. La misma, por cierto, que impulsó la burbuja inmobiliaria especulando con la vivienda. Cuando en el 2010 estalle el malestar social, ¿les pillarán por sorpresa?». ^[10]

Está por ver si habrá o no estallido social. Los sindicatos CCOO y UGT convocaron grandes manifestaciones preventivas en diciembre del 2009 avisando de que no tolerarían una reforma laboral que cargara a los trabajadores los costes de la crisis. El movimiento vecinal, como ya viene siendo habitual, cerró un año y abrió el siguiente denunciando el aumento abusivo de los precios de servicios básicos, en especial el del transporte público en distintas ciudades, con Madrid y Barcelona a la cabeza. Pero a finales de enero del 2010 no se albiraba ningún estallido social, si bien el Gobierno siguió haciendo méritos al proponer por sorpresa retrasar la edad de jubilación con el argumento de sostener el sistema público de pensiones.

Sea como fuere, en el 2009 sí hubo algunas acciones concretas, de alcance limitado pero muy a ras de barrio, que evidenciaron las múltiples posibilidades de respuesta a la crisis por parte de los movimientos urbanos o ciudadanos. Quizá la acción más llamativa fue la que llevaron a cabo por sorpresa, el 19 de diciembre, decenas de jóvenes catalanes que, convocados por la Asamblea de Parados de Barcelona, saquearon de forma organizada un supermercado del distrito obrero de Nou Barris: repartieron 12 carros de víveres entre el vecindario mientras, megáfono en mano, coreaban consignas contra la crisis económica y la precariedad laboral. La llegada de la policía autonómica puso fin, sin detención alguna, a una acción directa en la que el grito más coreado fue «¡Que pague Millet!», en referencia al expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, que perpetró un saqueo de millones de euros en esa emblemática institución cultural catalana sin que, aun descubierta y confeso, fuera detenido en el 2009.

Repolitizar a la gente desde los barrios

Precisamente el escándalo de corrupción del Palau de la Música, con una derivada de especulación urbanística en un hotel aledaño denunciada de antemano por el movimiento vecinal,^[11] sacó a relucir la capacidad de una entidad como la FAVB para abanderar un intento de repolitización de la sociedad desde la base en tiempos de desafección hacia los partidos y las instituciones. Esta necesidad de regeneración democrática la pudieron percibir por boca del movimiento vecinal representantes de todos los partidos catalanes y madrileños en los actos inaugurales de la exposición *Barcelona-Madrid. 40 años de acción vecinal*. Pero es que ya antes, y con hechos y no palabras, fue el movimiento vecinal el que, en Barcelona, Madrid, Santa Coloma de Gramenet, Valencia o Palma de Mallorca, tuvo un protagonismo destacado en las quizá tímidas reacciones populares a grandes escándalos de corrupción destapados o juzgados en el 2009.

En Barcelona, paralizados los partidos y la denominada sociedad civil por el *caso Millet* —en el que salieron a relucir connivencias corruptas, por acción u omisión, de la burguesía catalana, partidos como CiU y todas las administraciones públicas implicadas en la gestión del Palau de la Música—, tuvo que ser la FAVB quien se personara en el caso como acción popular. Ampliado el estupor social al destapar Baltasar Garzón el *caso Pretoria* de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet, que llevó a la cárcel al alcalde socialista y a exaltos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, también tuvieron que ser la FAVB y entidades vecinales colomenses quienes sacaran a la calle la indignación popular contra la corrupción. En el País Valencià y en Mallorca se dieron casos similares en los que el movimiento vecinal participó decisivamente en denunciar públicamente grandes escándalos de corrupción, que en esas comunidades conciernen sobre todo al PP.

Pero no solo en clave reactiva y de anticorrupción vivió el movimiento vecinal a la hora de intentar repolitizar a la ciudadanía desde los barrios. El trabajo más clásico y cotidiano dio también sus frutos. «La nueva CAVA-Aragón nace convencida de que el movimiento vecinal es un factor clave, no solo para luchar por los derechos ciudadanos, sino para vertebrar la sociedad aragonesa en su conjunto», rezó en un comunicado la nueva confederación vecinal aragonesa nacida en el 2009. Y tan o más significativo fue otro nacimiento: el de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, alumbrada formalmente el 24 de septiembre por 19 asociaciones y con otras tantas en espera de entrar. Teniendo en cuenta que algunas de esas asociaciones vecinales ahora federadas bajo la presidencia de Javier Muñoz tienen más de 40 años de historia, adquieren especial relevancia los titulares que dieron a la noticia los diarios *Gara* y *El Correo*, respectivamente: «Las asociaciones vecinales de Bilbo constituyen la primera federación de Euskal Herria» y «Los vecinos dan un paso adelante».

Que el nacimiento de nuevas federaciones vecinales es un paso adelante es innegable. Y que este solo puede darse desde la base para que el paso no sea en falso lo evidencia la escasa actividad y nula presencia pública en el 2009 de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV). Nacida el año anterior, la CEAV se demostró más como un aparato estructural que como una realidad representativa de un movimiento social. De hecho, las federaciones de Madrid y Barcelona, no integradas en la CEAV, siguieron marcando en cierta forma el camino alternativo a seguir por un movimiento vecinal en la encrucijada. La que describió Vicente Pérez Quintana al reconocer que el esquema sindical de lucha a base de presión y negociación al que las asociaciones de vecinos se han ajustado durante 40 años y que, si ha perdurado, es porque ha dado

resultados, es ahora «un modelo que ya ha entrado en barrena». Según el sociólogo y miembro de la FRAVM, lo atestiguan la escasa capacidad de movilización en la calle y las dificultades tanto de renovación de las juntas de las asociaciones como de ampliación de la base social del movimiento vecinal. Sin abandonar sus formas clásicas, todo ello obliga al movimiento vecinal a buscar esquemas complementarios de funcionamiento.

Hacia otro modelo de ciudad

De alguna forma, esquemas complementarios de funcionamiento del movimiento ciudadano son lo que intentan aportar desde el 2007 los militantes, investigadores y colectivos madrileños reunidos entorno al Observatorio Metropolitano. Tras el éxito de su trabajo fundacional *Madrid, ¿la suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad*, en mayo del 2009 el Observatorio Metropolitano

publicó *Manifiesto por Madrid. Crítica y crisis del modelo metropolitano*.^[12] El trabajo se insertó en esa difusa hegemonía discursiva en favor de otro modelo de ciudad ganada lentamente a pulso en los últimos años por el movimiento vecinal. Elogiando el *Manifiesto por Madrid*, el sociólogo y urbanista barcelonés Jordi Borja publicó en diciembre del 2009 un análisis del que, aunque sea largo, conviene citar la parte final como buen resumen del estado de la cuestión en el debate sobre el modelo de ciudad.

«La crisis económico-financiera global nos demuestra que hoy las ciudades y los territorios urbanizables no solo reciben los impactos de procesos globales, sino que también son uno de los factores causales. La ciudad no es el problema [sino la solución, como gustaban de proclamar buenos alcaldes progresistas como Pasqual Maragall, el Jaime Lerner de Curitiba o Ken Livingstone de Londres], pero la urbanización actual sí lo es. Se ha producido un círculo vicioso y perverso entre el capitalismo financiero especulativo y la urbanización. Por ejemplo, en los territorios metropolitanos de Madrid y Barcelona entre inicios de 1990 y el 2000 la mitad del suelo urbanizable lo adquirieron bancos, aseguradoras, cajas de ahorro. O sea, un capital especulativo que confaba en el apoyo público: legislación favorable a las hipotecas baratas, inversiones en obra pública, recalificación del suelo y apropiación privada de las plusvalías urbanas. No es justificable: el suelo urbanizable y urbano o es público o mediante los instrumentos del planeamiento y de la fiscalidad es necesario que la plusvalía urbana se socialice, no vaya a manos privadas, sean de quienes sean. El suelo rústico multiplica su valor mediante una decisión administrativa y el resultado es un factor corruptor de la política local y autonómica. Los ayuntamientos, ante la presión de los propietarios de suelo y de los promotores y la falta de recursos para hacer inversión, recalifican y, a veces, sus responsables (o sus partidos) caen en la tentación de participar en el negocio. La ideología absurda de la *ciudad competitiva* se traduce en la ciudad como negocio y legitima cualquier operación que mueva dinero y cemento. El resultado es el modelo de urbanización que ha entrado en crisis a partir del 2007 en EE UU y Europa, y especialmente en España. Un modelo muy visible en Madrid, pero también dominante en Cataluña. Los recientes escándalos de corrupción vinculados al urbanismo son solo la punta del iceberg. I más grave es la destrucción del territorio y la sociedad fragmentada y excluyente que se genera. Es un momento histórico que reclama un cambio de modelo, medidas legislativas potentes, transparencia pública y privada obligatoria y denuncia de las acciones y de las omisiones desde las instituciones y la sociedad civil. Un reto para políticos, intelectuales y movimientos sociales».^[13]

Que el reto no es fácil pero está al alcance del movimiento vecinal lo ejemplificaron en el 2009 —tras la unánime asunción política, el año anterior, del fracaso del *modelo Barcelona*— dos sentencias del Tribunal Supremo que cuestionaron el modelo urbanístico español en los términos que llevan tiempo denunciando las asociaciones de vecinos. La primera sentencia, que confirmó la pena de cárcel a dos dirigentes del PP balear por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en Andratx, cargó contra «la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado a España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística». En el texto, el Tribunal Supremo remarcó sin tapujos que «la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos». La otra resolución del Tribunal Supremo, fechada el 25 de mayo del 2009, exigió al Ministerio de Cultura que se posicionara específicamente sobre si el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia para el barrio marinero de El Cabanyal implicaba un expolio patrimonial, tal y como denuncian los vecinos desde hace años.

La coda de enero del 2010

El 2009 acabó en estos términos, pero la relevante coda que supuso enero del 2010 para el movimiento vecinal demuestra que, como en los tiempos históricos, no siempre el año natural encaja con el que definen los acontecimientos. Fue en enero del 2010 cuando la polémica sobre el padrón y la inmigración, la propuesta gubernamental de retrasar la edad de jubilación y el aumento del paro dejaron en suspenso la relativa paz social mantenida en los barrios hasta entonces pese a la dura crisis económica. También fue en enero del 2010 cuando la sorpresiva candidatura de Barcelona-Pirineos a organizar los Juegos Olímpicos de invierno del 2022 no solo dejó mal cuerpo a la ya anunciada candidatura de Zaragoza-Jaca y puso vinagre a la herida de Madrid, que en octubre vio como Río de Janeiro la derrotaba de cara a organizar los Juegos Olímpicos de verano del 2016. La nueva candidatura olímpica de la capital catalana también reveló en enero del 2010 que, como denunció la FAVB, el Ayuntamiento —por simple cálculo electoralista del mismo PSC que en el 2008 pareció asumir el fin del *modelo Barcelona*— no ha renegado aún de un modelo de crecimiento y de ciudad que ni es sostenible ni resuelve los problemas reales de la ciudadanía y de los barrios.

Con todo, fue la de El Cabanyal la batalla que —iniciada en 1998 pero replanteada en enero del 2010 tras rechazar el Gobierno central, a instancias del Tribunal Supremo, el expolio patrimonial que supone el plan urbanístico compartido y aún acelerado por el Ayuntamiento y la Generalitat valencianos— mejor situó el cierre del año real para el movimiento vecinal. O sea, con las espadas en alto. Y a pie de calle. Eso ejemplificaron las 15.000 personas que, el 31 de enero, se manifestaron en Valencia en contra del plan de la alcaldesa Rita Barberá y el presidente Francisco Camps (ambos del PP) que quiere destripar el barrio marinero para abrir hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez.

La portavoz de la Plataforma Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, explicó que la operación urbanística significa un «ataque a la cultura, a la memoria colectiva y a la identidad, porque es un barrio singular y hermosísimo digno de permanecer en el tiempo». La geógrafa Carme Miralles precisó que lo que está en juego en El Cabanyal «no se trata solo de paisajes urbanos físicos, sino también y, especialmente, de memoria urbana, una institución social que ayuda a formar conciencia colectiva. Una memoria urbana que forma parte, inexorablemente, del patrimonio cultural que está en peligro. [...] Cuando se pierde el respeto a esa escala humana, a esa unidad vecinal, a esa

memoria urbana, y con frecuencia aforan solo parámetros económicos y megalómanos, la ciudad y, con ella, la ciudadanía, se degrada en su esencia».^[14] O sea, lo resumido al principio de este ensayo: el año vecinal del 2009 se caracterizó en muchos frentes por el intento de acumular fuerzas desde la memoria histórica con vistas a incidir en la lucha contra la crisis y por otro modelo de ciudad.

* Periodista e historiador, codirige la revista *Carrer* de la FAVB y trabaja en una tesis doctoral de la UB sobre el movimiento vecinal y la transición en Barcelona.

[1] Arroyo, Francesc. «Excombatents? Mai», en *El País. Quadern*, n.º 1.329, 10 de diciembre de 2009, Barcelona, pp. 1-3.

[2] Andreu, Marc. «El combat per la memòria veïnal», en *L'Avenç*, n.º 354, febrero de 2010, Barcelona, pp. 8-9.

[3] Fabre, Jaume. «La llarga batalla per una ciutat millor», en *Carrer*, n.º 114, FAVB, diciembre de 2009, Barcelona, pp. 43-44.

[4] Solans, Joan Antoni. «La recuperació de la ciutat a la transició», en *Carrer*, n.º 114, FAVB, diciembre de 2009, Barcelona, pp. 45-46.

[5] Montaner, Josep Maria i Muxí, Zaida. «A l'avantguarda del canvi social», en *Carrer*, n.º 114, FAVB, diciembre de 2009, Barcelona, p. 53.

[6] Pérez Quintana, Vicente y Sánchez León, Pablo (ed.). *Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008*, Catarata, 2008, Madrid.

[7] Martín Villa, Rodolfo. «Carta a los Reyes Magos», en *El País*, 3 de enero de 2009, Madrid, p. 23.

[8] Ramoneda, Josep. «Paro y escasa conflictividad», en *El País*, 31 de diciembre de 2009, Madrid, p. 20.

[9] Ezquiaga, José María. «Una ciudad segregada en barrios es explosiva», en *El País*, 2 de enero de 2010, Madrid, p. 56.

[10] Colau, Ada. «El año de los despojados», en *El País*, 23 de diciembre de 2009, Madrid, p. 35.

[11] Ver *Carrer*, n.º 109, diciembre de 2008, Barcelona, FAVB, pp. 2-4.

[12] Observatorio Metropolitano. *Madrid. ¿La suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad*, Traficantes de Sueños, 2007, Madrid; *Manifiesto por Madrid. Crítica y crisis del modelo metropolitano*, Traficantes de Sueños, 2009, Madrid.

[13] Borja, Jordi. «Manifest contra la perversió urbanicida», en *L'Avenç*, n.º 359, diciembre de 2009, Barcelona, pp. 10-11.

[14] Miralles, Carme. «Cabanyal, más de lo mismo»